



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: CLAUDIA ELENA ORTEGA ORTEGA
Demandado: COLPENSIONES y PORVENIR S.A.
Procedencia: JUZGADO VEINTITRÉS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA n.º 122 DEL 18 DE AGOSTO DE 2023
Radicado n.º: 05001-31-05-023-2019-01195-01 (O2-23-138)

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de agosto de dos mil veintitrés (2023), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**, **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**, y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación propuestos por PORVENIR S.A., y COLPENSIONES, así el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta última, dentro del proceso ordinario instaurado por **CLAUDIA ELENA ORTEGA ORTEGA** en contra de **COLPENSIONES** y **PORVENIR S.A.**, proceso con radicado n.º 05001-31-05-023-2019-01195-01 (O2-23-138).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

1.1 Demanda. Mediante vocera judicial, la litigiosa por activa **CLAUDIA ELENA ORTEGA ORTEGA** pretende la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, y de consiguiente, la reactivación de la afiliación en Colpensiones, la devolución del capital ahorrado, y las costas del proceso, en cuyo sustento fáctico señaló que se afilió al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A. en mayo de 2006; que dicha afiliación al régimen se dio por intermedio de un empleador de la AFP sin que se brindara información sobre las ventajas o desventajas para ser afiliada; y que solicitó a COLPENSIONES el traslado de régimen el día 11 de octubre de 2019, sin que se haya dado respuesta hasta a la presentación de la demanda. (Fol. 3 a 12 archivo No 01)

1.2 Trámite de primera instancia y contestación de la demanda. La demanda fue admitida por el Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 11 de diciembre de 2019 (doc. 6 pág. 1 y 2), con el cual ordenó su notificación y traslado a las partes accionadas.

1.2.1 COLPENSIONES.: Una vez notificada (doc. 8), contestó la demanda por intermedio de gestor judicial el 5 de febrero de 2020 (doc. 9 pág. 1 y ss.), oponiéndose a las pretensiones incoadas, por cuanto carecen de fundamentación fáctica y jurídico, sin que haya sido demostrado el vicio en el consentimiento que pudiese generar una nulidad por error, fuerza o dolo. Propuso como medios exceptivos de mérito los de falta de causa para demandar, inexistencia de la obligación de aceptar la vinculación al RPMPD administrado por Colpensiones, prescripción, compensación, buena fe, imposibilidad de condena en costas, y declaratoria de otras excepciones.

1.2.2 PORVENIR S.A.: Una vez notificada (doc. 13 pág. 1 y 2), dio contestación a la demanda a través de apoderado judicial el 10 de noviembre de 2020 (doc. 15 pág. 1 a 26), oportunidad en la cual se opuso a las pretensiones formuladas, bajo el argumento de que la AFP brindó información clara, precisa, veraz, suficiente a la actora; que le garantizó el derecho al retracto; que la demandante pretende desconocer la restricción legal del traslado, esto es, que está a menos de 10 años para adquirir el derecho pensional. Como excepciones de mérito propuso las de prescripción, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación, y la genérica.

1.2 Decisión de primer grado. El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida el 6 de junio de 2023 (doc. 33 pág. 1 y ss.), con la que el cognoscente de instancia declaró la ineficacia de la afiliación a PORVENIR S.A., al tiempo de condenar a PORVENIR S.A. a que, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria, traslade a COLPENSIONES el valor de la cuenta de ahorro individual de la demandante con sus respectivos rendimientos, las cuotas de administración, las primas previsionales y los porcentajes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, debidamente indexados, y remitir al RPMPD la descripción discriminada de todos los conceptos, con el detalle pormenorizado de los IBC y aportes. Así como ordenó a COLPENSIONES, recibir dichos rubros, convertirlos a semanas y tener a la demandante como afiliada a dicha entidad sin solución de continuidad. Finalmente, gravó en costas procesales a la AFP PORVENIR S.A.

1.4 Apelación. Inconformes con la sentencia de instancia, recurrieron en apelación las siguientes partes procesales:

1.4.1 Colpensiones. Manifiesta que la demandante ya no se encuentra dentro del tiempo para que se efectuó el traslado de régimen, por cuanto le faltan 10 años para pensionarse; que no es beneficiaria del régimen de transición; que nunca estuvo afiliada al ISS, hoy COLPENSIONES; que desde que inició su vida laboral era su intención afiliarse al RAIS; que a Colpensiones no le es dable asumir los riesgos de pensión de vejez, invalidez y muerte, cuando nunca ha estado vinculada al RPMPD.

1.4.2 Porvenir S.A.: Adujo que su representada cumplió con todas las obligaciones a su cargo en lo que refiere al deber de información; que la permanencia de la actora en el RAIS ha sido una decisión libre, voluntaria, e informada; que a pesar de que la AFP tiene la obligación de brindar la información necesaria, completa y transparente a los usuarios para que seleccionen el régimen que consideren pertinente, cuando se trata de una filiación inicial no resulta razonable declarar la ineficacia y disponer que las cosas retornen a su estado natural como si el acto jurídico no se hubiese efectuado, ya que esto implicaría que frente a los efectos de la ineficacia la afiliada no cuente vinculación al sistema; que no hay lugar a la indexación, pues para ello se tiene los rendimientos los cuales compensan la depreciación del poder adquisitivo de la moneda.

1.5 Trámite de Segunda Instancia. El recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta fue admitido por el colegiado el 26 de junio de 2023 (carp. 02, doc. 02), y mediante auto del 04 de julio de 2023 (carp. 02, doc. 03), se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 de la ley 2213 de 2022, presentaran alegatos de conclusión por escrito, de estimarlo del caso, siendo que oportunamente Colpensiones insta que se revoque la decisión de instancia y se absuelva de todas las pretensiones, dado que no se configura la ineficacia alegada, o en su defecto se devuelvan íntegramente las cotizaciones; asimismo, presentó alegatos Porvenir S.A., la que deprecia absolver a su defendida de todas y cada una de las pretensiones, revocando la decisión de instancia.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

2.1 Apelación sentencia, y principio de consonancia. Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por PORVENIR S.A., advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, y de igual forma, se estudiará la sentencia de primera instancia en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES, en todo lo que no sea objeto de apelación, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.2 Problema jurídico. El *thema decidendi* en la presente Litis se centra en definir: **i)** ¿Si operó la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional efectuado por el extremo litigioso por activa a la AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad convidada a juicio?, y de ser así, **ii)** ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la ineficacia del traslado?

2.3 Tesis de la sala y solución a los problemas jurídicos planteados. El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio** en cuanto a la declaración de ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional a la AFP demandada, siguiendo la tesis de que no se le brindó a la actora la asesoría integral y cualificada que pregonaba el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y en cuanto a la integralidad de las consecuencias jurídicas que conlleva la devolución de las cotizaciones, esto es, que se debe ordenar el traslado de los descontados por seguros previsionales, por el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, y por gastos o comisiones de administración, a la par de que tales descuentos deben retornar al RPMPD de manera indexada, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.4 Ineficacia del traslado del RPM al RAIS. En lo que interesa a la litis, no es objeto de discusión que la accionante nació el 18 de mayo de 1968 (doc. 4 pág. 1), que no es beneficiaria del régimen de transición (doc. 4 pág. 1 y doc. 17 pág. 6 a 24); que CLAUDIA ELENA ORTEGA ORTEGA se afilió al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A., desde el día **3 de mayo de 2006** (doc. 17 pág. 3) administradora en la que se encuentra actualmente afiliada; y que solicitó su traslado a COLPENSIONES el 11 de octubre del 2019 (doc. 4 pág. 17 a 19) sin que haya recibido respuesta por la entidad pública.

Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que este juzgador plural viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008 hasta la más reciente sentencia SL1084-2023, línea jurisprudencial en la que se haya el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que la suscripción del formulario de afiliación es insuficiente para probar el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor de la afiliada como parte débil de la relación jurídica contractual, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos

los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiaria del régimen de transición, o esté próxima o no a pensionarse.

En esa misma dirección, preciso es relieves por la Sala que para la fecha afiliación al régimen pensional el 3 de mayo de 2006, la AFP accionada tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1° del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1217-2021, consiste en: *“ilustrar a sus potenciales afiliadas, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales.”*

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación y traslado de régimen pensional, se allegó el correspondiente formulario de afiliación (doc. 17, pág. 3), mismo que no fue tachado ni desconocido por la parte actora, empero, tal probanza no refleja que se haya presentado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta explicar los beneficios y características de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas que conllevaría la afiliación, de cuya explicitud no hay prueba alguna, previo al momento de efectuarse la afiliación o a la sazón de este.

En este punto, estima pertinente la Sala acotar que si la AFP demandada no cuenta con ningún soporte documental para la fecha de la afiliación, al brindarle a la actora información únicamente de manera verbal, tal circunstancia deja entrever una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegarse un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que indica la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que se requiere acreditar la efectiva asesoría integral brindada en la antesala de la afiliación de régimen, ilustrando al interesado sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, apercibiendo a la promotora del juicio de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima debía efectuar aportes voluntarios adicionales o extraordinarios a las deducciones de ley por cotizaciones; que para causar la pensión de

vez se debe contar con una suma dineraria mínima en la cuenta de ahorro individual; que la existencia de eventuales beneficiarios por sobrevivencia incrementan dicha suma mínima requerida, entre otras particularidades, puesto que *in fine* la asesoría no debe estar encaminada a persuadir a la afiliada con llamativos rendimientos financieros o la posibilidad de acceder a la pensión sin importar la edad, sino que debe orientarse también a que la afiliada pueda lograr la prestación económica que mejor se acompañe con sus expectativas pensionales y densidad cotizacional.

Ahora, si bien la litigiosa por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que antes de suscribir el formulario de afiliación a la AFP una asesora se acercó a su lugar de trabajo (min. 19:54), no puede pasar de soslayo la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión de la afiliada haya sido libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, puesto que, por el contrario, la accionante enfatizó que la asesoría brindada previamente a la afiliación fue superficial, fragmentaria, pero sin expresarle cuáles eran las características puntuales y comparativas del RAIS y del RPMPD, ni las posibles desventajas de su afiliación al RAIS.

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió la pretensora, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el ejecutivo de servicios que atendió a la litigiosa por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible a la potencial afiliada, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, la afiliación al régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas hechas por el extremo litigioso activo en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción de la parte demandante frente a un tema de alta complejidad como lo es la liquidación y cálculo de una mesada pensional, como también las referidas a que el afiliada no haya realizado indagaciones por su cuenta de su situación pensional, en tanto el deber de brindar tal información privilegiada corresponde *ope legis* a la AFP.

De igual forma, en el mismo precedente judicial en cita, la Corte Suprema de Justicia estudia la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del status quo, indicando que: “a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la

parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”.

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión de instancia en este tópico, en cuanto con acierto declaró la ineficacia de la afiliación efectuada por la demandante al RAIS.

2.5 Traslado de las cotizaciones. A este respecto, es preciso indicar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia del máximo tribunal de esta jurisdicción, en sentencias como las SL31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, al tiempo que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que dicha entidad sea un tercero la imposibilite para recibir los aportes, por la simple y llana razón de que esta entidad administra el régimen de prima media con prestación definida, y atendiendo a que de conformidad con el artículo 12 de la Ley 100 de 1993 los dos regímenes de pensiones si bien coexisten son excluyentes, y por tanto, una vez declarada la ineficacia de la afiliación en el RAIS, consiguientemente la AFP deberá devolver a COLPENSIONES todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación, con independencia de que la parte actora haya estado afiliada al ISS con antelación a la vigencia de la Ley 100 de 1993.

Y aunque si bien es cierto en la Sentencia SL4211-2021, con radicado 85164, la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que “... *al declarar la ineficacia del acto, nace el escenario de que el actor nunca hizo parte del sistema*”, ha de memorarse que el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, expresamente dispone que cuando la afiliación queda sin efecto, la misma “... *podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador*”. En paralelo, conviene memorar que los casos en que las Salas de Descongestión estimen necesario cambiar un precedente o crear una línea de pensamiento (jurisprudencia) deben infaltablemente remitir el proyecto a la Sala permanente para que sea esta la que estudie su viabilidad y pertinencia (artículo 2º de la Ley 1781 de 2016, adicionatorio de un párrafo al artículo 16 de la Ley 270 de 1996, Sentencia C-154 de 2016 y Sentencia CSJ SL593-2021).

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL2877-2020, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual se trasuntan los apartes pertinentes:

“i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos,

porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho la demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que la demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por la promotora del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones.”

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010) y las sumas de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, habida cuenta que a pesar de que tales descuentos tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente preestablecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento de un fondo de garantía, aquellos nunca hubieran sido detraídos por la AFP de no haberse verificado la afiliación y traslado de régimen pensional.

En esa misma dirección, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todas las cotizaciones y sus rendimientos a COLPENSIONES, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema sino también la efectividad del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no soslaya esta Sala que existe un

pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en torno del tema, es preciso indicar que tal acto aborda es el traslado de régimen pensional por voluntad propia y no en virtud de la declaratoria de su ineficacia, además de no ser de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales; de ahí que, la Sala se aviene es al precedente jurisprudencial que en derredor del tema ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ampliamente quedó expuesto en líneas anteriores.

Así mismo, debe ordenarse que la devolución de los descuentos de manera indexada, atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, esto es, no fue materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su reconocimiento oficioso, en tanto en cuanto que ello no se traduce en una condena sino en el reconocimiento del efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos por el transcurso del tiempo, prohijándose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de justicia, Sala de Casación Laboral.

En suma, vale acotar por recapitular los predicamentos del máximo tribunal de casación laboral, en la reciente sentencia SL1126-2022, Radicación n.º90257, del 23 de marzo de 2022, M.P. Omar Ángel Mejía Amador, cuando describe de forma meridiana cuál es la carga asumida por los fondos privados, aun tratándose de traslados horizontales dentro del RAIS, que significa la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional, en los siguientes términos: “...Por tal razón, esa declaratoria obliga a las entidades del RAIS a devolver todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual del titular, ya que los mismos serán utilizados para la financiación de la prestación pensional a que tenga derecho el afiliado en el régimen de prima media con prestación definida. Ello, incluye el reintegro a Colpensiones del saldo de la cuenta individual, sus rendimientos y los bonos pensionales, los valores cobrados por los fondos privados a título de gastos de administración y comisiones, incluidos los aportes para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima y las primas de los seguros previsionales, sumas debidamente indexadas, pues, desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos han debido ingresar al RPMPD administrado por Colpensiones (CSJ SL2877-2020, SL 5595-2021). Y sin perjuicio de las acciones que pueda ejercer Colpensiones por los conceptos adeudados a favor del demandante generados en virtud de los múltiples traslados”. -Subrayas de la Sala-

Ello así, habrá de confirmarse la sentencia de instancia emitida, en tanto ordenó la ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS, junto con la devolución indexada de los rubros deducidos de las cotizaciones realizadas por la AFP.

2.6 Excepción de prescripción. En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memora que *“la acción de ineficacia del traslado entre regímenes pensionales es imprescriptible. En efecto, a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria de ineficacia del acto de afiliación, debido a que con esta declaración se busca comprobar o constatar un estado de cosas - carencia de efectos jurídicos del acto de afiliación y traslado de régimen pensional desde su génesis con anterioridad al inicio de la litis (CSJ SL1688-2019, reiterada en la CSJ SL1421-2019, CSJ SL4426-2019, CSJ SL4360- 2019 y CSJ SL373-2021).”* (SL3871-2021), a más de que esta Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, las consecuencias de la declaratoria de la ineficacia hacen imperativo el traslado de las aportaciones de manera integral, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele (SL361-2019).

2.7 Costas. Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., y en favor de la parte demandante, fijándose como agencias en derecho la suma de un (1) SMMLV, esto es, la suma de **\$ 1.160.000**, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación propuesto, de acuerdo con la regla prevista en el numeral 1 del artículo 365 del CGP. No se impondrá condena en costas contra COLPENSIONES, en tanto la sentencia de primer grado fue analizada integralmente en el grado jurisdiccional de consulta a su favor. Las de primera instancia se confirman, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., por no haber sido materia de apelación.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia materia de consulta proferida el 6 de junio de 2023 por el JUZGADO VEINTITRÉS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, según y de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.


SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A., y en favor de la parte demandante fijándose como agencias en derecho la suma de \$ 1.160.000. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

Comuníquese, notifíquese y cúmplase.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario